Ana Obregón exige que el aumento del presupuesto de Inclusión Social se traduzca en más plazas de dependencia y ayudas efectivas para los jóvenes

La diputada del PRC reclama un calendario para las plazas concertadas pendientes y denuncia el retraso en el desarrollo de la Ley de Juventud

Santander, 10 de noviembre de 2026

La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Ana Obregón, ha reclamado hoy que el incremento del presupuesto de la Consejería para 2027 se traduzca en más plazas para las personas dependientes, financiación suficiente para los servicios sociales municipales y medidas que faciliten a los jóvenes el acceso a una vivienda y la capacidad para desarrollar su vida en Cantabria.

Durante la comparecencia en la Comisión de Economía de la consejera, Begoña Gómez del Río, la regionalista ha valorado el aumento del presupuesto de este departamento en 35,2 millones de euros, hasta alcanzar los 367,1 millones, pero ha exigido que el Gobierno concrete qué mejoras recibirán los ciudadanos y cómo cumplirá los acuerdos pendientes.

Obregón ha centrado una sus principales demandas en las plazas concertadas para personas mayores, a las que las cuentas de 2027 destinan 137 millones, 14 más que este año, pero sin concretar cuántas plazas adicionales están previstas.

En este sentido, ha reprochado a la consejera el incumplimiento del compromiso de concertar 200 nuevas plazas en centros residenciales con pernocta y le ha pedido que explique cuántas se han puesto efectivamente en servicio, cuántas siguen pendientes y cuándo prevé completar su creación.

Asimismo, ha valorado la reducción anunciada del 20 por ciento en los copagos y el incremento del 20 por ciento de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, aunque ha insistido en que el objetivo debe ser que la atención llegue a tiempo. “Las personas dependientes y sus familias necesitan plazas reales, disponibles y adecuadas a sus necesidades”, ha subrayado.

En materia de discapacidad, ha reclamado recursos profesionales y atención especializada, además de información sobre la aplicación del acuerdo parlamentario de marzo de 2026 para impulsar el ocio inclusivo de los jóvenes con discapacidad intelectual. En concreto, ha preguntado qué actuaciones se desarrollan, qué entidades participan y cuántos jóvenes se benefician.

Respecto a la juventud, la diputada ha denunciado que siguen pendientes dos instrumentos fundamentales para desarrollar la Ley de Políticas de Juventud: la constitución del Consejo de Políticas de Juventud y la presentación del Plan Integral, cuyo plazo legal venció el pasado 12 de septiembre.

También ha reclamado que el Gobierno concrete cuándo pondrá en marcha las medidas acordadas con el PRC, entre ellas el descuento de hasta el 70 por ciento en el transporte regional para menores de 30 años y la Cuenta Vivienda para menores de 36 años, después de haber implantado este curso la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Cantabria.

En cuanto a los servicios sociales municipales, Obregón ha valorado los 1,5 millones adicionales para personal, pero ha advertido de que reforzar las plantillas no sustituye la necesidad de financiar el coste real de los servicios que prestan ayuntamientos y mancomunidades, por lo que ha pedido información sobre el reparto de esos recursos y las medidas para garantizar la ayuda a domicilio, la teleasistencia y el acompañamiento en todo el territorio.

La portavoz regionalista también ha solicitado explicaciones sobre el apoyo al acogimiento familiar, la puesta en funcionamiento del servicio Barnahus y los recursos de vivienda, formación y acompañamiento para quienes salen del sistema de protección al cumplir 18 años. “La protección de la infancia no termina cuando un joven cumple 18 años”, ha recordado.

Finalmente, ha urgido al Gobierno a informar sobre la ejecución de los fondos contra la violencia de género y los recursos propios que aporta Cantabria para atender a las víctimas y a sus hijos, prevenir la violencia sexual y garantizar que la protección llegue también a las mujeres de los municipios pequeños y sel medio rural.

“Detrás de cada partida presupuestaria hay personas que esperan una respuesta de la Administración”, ha concluido.